

032/2024

Tal y como adecuadamente expone la Memoria de Análisis de Impacto Normativo aportada con el texto del anteproyecto (pág. 58), sobre una primera versión del anteproyecto de ley, previa a la disolución anticipada de las Cortes Generales, se emitió informe por esta AEPD (004/2023) en el que se pusieron de manifiesto determinadas observaciones al texto presentado.

I

Como ya se expuso en el citado Informe de esta AEPD 004/2023, el marco normativo aplicable a los tratamientos de datos de carácter personal que puedan realizarse al amparo de la norma proyectada está constituido, con carácter general, por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

La primera observación que se hizo en el previo Informe 004/2023 era referida al denominado Visualizador Industrial (anterior art. 32, hoy 47), en el que se expuso que el texto remitido no especificaba si el Visualizador habría de incluir datos de carácter personal, que en el supuesto de que se incluyesen, se deberán tenerse en cuenta las consideraciones del citado informe al respecto, y que en caso contrario, como garantía específica debería incluirse expresamente que no se incluirán datos de carácter personal.

La versión actual del proyecto sometida a informe expresamente señala (art. 47.2) que en cualquier caso no se incluirán en dicho Visualizador datos de carácter personal, por lo que, si este es el caso, no habrá lugar a la aplicación de las garantías y protección que establece la normativa sobre protección de datos personales.

II

En segundo lugar, el Informe de la AEPD 004/2023 hacía referencia al Registro Integrado Industrial, regulado en el Anteproyecto sometido ahora a Informe en el Capítulo II del Título V, cuyos fines recoge el actual artículo 49:

- a) Integrar la información sobre la actividad industrial en todo el territorio español que sea necesaria para el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de supervisión y control a las administraciones públicas competentes en materia industrial, en particular sobre aquellas actividades sometidas a un régimen de autorización, comunicación o de declaración responsable.*
- b) Constituir el instrumento de información sobre la actividad industrial en todo el territorio español, como un servicio a las administraciones públicas, la ciudadanía y, particularmente, al sector empresarial.*
- c) Suministrar a los servicios competentes de las Administraciones Públicas los datos precisos para la elaboración de los directorios de las estadísticas industriales, en el caso estatal a las que se refieren los artículos 26 g) y 33 e) de la Ley 12/1989, de 9 mayo, de la Función Estadística Pública.*

Dicho informe establecía que dicho Registro sí que trataría datos de carácter personal, pues tanto en el supuesto de que se trate de empresarios individuales, como en el supuesto de que los Organismos de Control sean personas físicas, se estarán tratando datos de carácter personal.

Ante la falta de mención en el primer anteproyecto presentado a la normativa de datos personales, el Informe ya reiterado sugirió que debería incluirse una disposición adicional referida al tratamiento de datos personales, en la que se recoja que los tratamientos de datos personales regulados en la presente ley se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En atención a esta sugerencia, el anteproyecto presentado en esta segunda ocasión ha recogido normas a tal fin en el apartado 4 del art. 49 y en el apartado 5 del art. 50. Comenzando por este último, dice así:

- 5. Cuando el contenido del Registro previsto en los apartados anteriores alcance a datos de carácter personal, se tendrá en cuenta, en todo caso, los principios relativos al tratamiento del artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y, en particular, el de minimización de datos.*

Lo anterior se considera correcto.

En cuanto al apartado 4 del art. 49 dice así:

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el ejercicio de la competencia atribuida en el apartado 1 tendrá la consideración de misión realizada en interés público, en el sentido y a los efectos del artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en virtud de lo cual, los datos de carácter personal referidos en el artículo 50 que eventualmente se recaben y los tratamientos que, directamente vinculados a las finalidades enumeradas en este artículo, se prevea realizar sobre ellos se considerarán lícitos.

Esto es, este precepto establece la base jurídica del tratamiento conforme permite el art. 6.3 RGPD o art. 8 LOPDGDD, mediante una norma con rango de ley, lo cual se considera igualmente correcto.

Hay que mencionar no obstante que este precepto se refiere, correctamente, a los datos de carácter personal recogidos en el artículo 50 de la propia ley, pero que sin embargo el apartado 3 del artículo 50 dice además que “[a]demás de los datos básicos referidos en el apartado 1, el Ministerio de Industria y Turismo determinará reglamentariamente los datos complementarios que deban incorporarse de oficio al Registro, a fin de dar cumplimiento al artículo 49.1.a)”. Cabe recordar aquí el principio de reserva de ley que rige en materia de derechos fundamentales (art. 53 CE y específicamente en la materia de protección de datos personales véase STC 292/2000, FJ 11), por lo que la llamada al reglamento no podría determinar que se incluyesen datos personales adicionales al registro a los ya establecidos en la ley.

El art. 52 del nuevo texto del anteproyecto también establece la corresponsabilidad, a los efectos del art. 26 RGPD, entre la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas respecto del traslado de datos de carácter personal que se produjeran para su inclusión en el Registro Integrado Industrial. Para ello y conforme al art. 26, el precepto dispone que el Ministerio de Industria y Turismo y el órgano competente de la comunidad autónoma deberán formalizar, a través del instrumento jurídico pertinente, el acuerdo necesario para determinar sus respectivas responsabilidades, en particular, en lo que atañe a las funciones a ejercer por cada uno en relación con los derechos de los interesados, que es, precisamente, lo que requiere el citado art. 26 RGPD, por lo que dicho precepto se considera favorablemente.

III

Se ha añadido además una Disposición adicional primera de denominada “Asociaciones sectoriales. Protección de datos de carácter personal”.

1. El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Industria, podrá recabar la información que considere necesaria de las empresas y asociaciones sectoriales industriales para el ejercicio de sus funciones, para lo que podrá mantener una interlocución directa con unas y otras.

2. Dicha interlocución tendrá por finalidad efectuar a dichas empresas y asociaciones comunicaciones de cualquier tipo que sean de relevancia para las mismas y sus asociados o solicitarles el suministro, con carácter voluntario, de información sobre la situación de los sectores en los que operan o a los que representan que sea de interés para la formulación o diseño de políticas públicas o para la monitorización temporal de cualquier situación de perturbación en la economía o en el funcionamiento de dichos sectores. No obstante, cuando la finalidad de la interlocución sea la realización de comunicaciones, en ningún caso las mismas podrán contener información con potencial de generación de ventajas para las entidades destinatarias, salvo que dicha información esté públicamente disponible por otros canales para toda la población de empresas y asociaciones sectoriales de la industria en el territorio español. La interlocución podrá ser tanto colectiva, dirigida masivamente a todo o a parte del conjunto de empresas y asociaciones sectoriales, como individualizada cuando así lo requiera la naturaleza de la comunicación o la petición de información.

3. Para el ejercicio de dicha competencia, la Secretaría de Estado de Industria podrá recabar de los representantes de las mencionadas empresas o asociaciones los datos de contacto pertinentes, que serán preferentemente genéricos de la organización respectiva. No obstante, sea por la voluntad de dichos representantes o por la conveniencia de contar con un canal de contacto más ágil y efectivo, la Secretaría de Estado de Industria también podrá recabar no coercitivamente datos de carácter personal de aquellos.

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el ejercicio de la competencia atribuida en el apartado 1 tendrá la consideración de misión realizada en interés público, en el sentido y a los efectos del artículo 6.1.e) del

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en virtud de lo cual, los datos de carácter personal referidos en el apartado 3 que eventualmente se recaben y los tratamientos que, directamente vinculados a las finalidades enumeradas en el apartado 2, se prevea realizar sobre ellos se considerarán lícitos.

Esta AEP sugiere que se modifique el apartado 3, ya que, si la finalidad de los tratamientos para los que se solicitan datos personales es, como establece el apartado 2, mantener una interlocución con la finalidad de efectuar a dichas empresas y asociaciones comunicaciones de cualquier tipo que sean de relevancia para las mismas y sus asociados o solicitarles el suministro, con carácter voluntario, de información (...) es obvio que habrá de ser para el ejercicio de sus funciones (como dice el apartado 2 de dicho artículo). De hecho, el apartado 3 parte de un error conceptual, que parece ser considerar que los “datos de contacto” no son datos personales, cuando sí lo son (véase art. 19 LOPDGDD). El art. 19.4 LOPDGDD también ampara los tratamientos de datos de contacto de empresarios por los responsables o encargados del tratamiento a los que se refiere el artículo 77.1 de la ley (entre ellas la Administración General del Estado) cuando ello se derive de una obligación legal o sea necesario para el ejercicio de sus competencias. Por ello, se considera que el apartado 3 debería de circunscribirse a lo permitido por dicho art. 19 LOPDGDD. El apartado 3 de la citada disposición adicional primera podría quedar redactado así:

3. Para el ejercicio de dicha competencia, la Secretaría de Estado de Industria podrá recabar de los representantes de las mencionadas empresas o asociaciones los datos de contacto necesarios para su localización profesional y en su caso los relativos a la función o puesto desempeñado, siempre que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios. También podrán solicitar los datos de contacto relativos a los empresarios individuales cuando se refieran a ellos únicamente en dicha condición, para las finalidades previstas en esta disposición adicional y no se traten para entablar una relación con los mismos como personas físicas.